

Unidad y Paz De los Chilenos

Nuestro país sufrió durante los años de la llamada Unidad Popular el desasosiego, la inseguridad y el desencadenamiento de los odios. Paradójicamente, mientras los comunistas hablaban de "unidad" y de "no a la guerra civil" la ciudadanía experimentaba en lo grande y en lo pequeño los efectos de la desunión, de la prepotencia política de unos pocos y de la destrucción de las riquezas existentes y potenciales del país.

Cuando llegó el 11 de septiembre de 1973, los chilenos sentían ansia de paz y de unidad. Cualquier sacrificio material era preferible a este desgarramiento moral que se ahondaba en todas las tramas de la convivencia.

Desaparecida la acción pública de los mensajeros del odio y de la violencia, la población se consagró al trabajo y mostró notable solidaridad y comprensión para soportar las duras consecuencias derivadas del caos marxista. El peso de una reconstrucción sería y sin demagogias gravita sobre todos. A ello se añaden los perjuicios de una campaña internacional que persigue nuestro aislamiento político, económico y cultural. Serenamente, el país afronta su destino.

Múltiples informaciones indican, sin embargo, que los interesados en quebrantar la paz y la unidad de los chilenos continúan en su tarea. La violencia rebrota y el espíritu de bandería tiende a surgir con cualquier pretexto. Las fuerzas de seguridad han debido enfrentar a extremistas armados y reprimirlos; arrestar a hecheros, cómplices y encubridores de graves delitos e incautarse de antecedentes demostrativos de la acción criminal que se proyectaba. Hay plena confianza en que las autoridades competentes procederán en todo esto conforme a derecho y actuarán con tanta energía como justicia en resguardo del orden público.

La circunstancia de que se haya sorprendido a algunos eclesiásticos en actitudes de auxilio a los extremistas se presta para informaciones y comentarios que pueden lesionar

el sentimiento de los católicos. Sin embargo, es explicable que los chilenos de las más diversas convicciones —inclusive, por cierto, los católicos— sientan que el peor daño para la unidad y la paz consistiría en ignorar o desconocer las magnitudes de la acción extremista. Y muchos de estos últimos se ven en la obligación de denunciar con pasión ese peligro.

De ahí entonces que la opinión pública tiene que ser ilustrada verazmente acerca de los focos de insurgencia y de las ramificaciones que los vinculan a personas aparentemente ajenas a la preparación del terrorismo, cualesquiera que sean su investidura o sus creencias, pero la identificación de esa conjura no compromete ni puede comprometer a las instituciones religiosas cuyos miembros aparezcan afectados por alguna participación en hechos que pesquisan las autoridades civiles.

Es esencial para la preservación de la paz que los delitos que se cometen o se proyectan no contribuyan a desunir a quienes son por completo inocentes de esas fechorías y que, más aún, es casi seguro que figurarían entre las primeras víctimas de ellas.

Por lo mismo hacen bien las autoridades, tanto del Gobierno como de la Iglesia, en mantener el respeto mutuo y en no interferir en el campo de sus respectivas jurisdicciones. Nada sería más ventajoso para el extremismo que contribuir con sus crímenes a la segmentación de la ciudadanía en bandos opuestos, alimentados por la desconfianza y el rencor. Si, en cambio, los responsables del orden civil y del religioso así como los conductores de la opinión pública ponen sus mejores esfuerzos en circunscribir el fenómeno extremista a sus verdaderos límites y en evitar que los enemigos de la paz triunfen en los espíritus antes que en el campo de batalla, nuestro país habrá logrado sobreponerse a un nuevo peligro y podrá afrontar con mayores esperanzas el porvenir.